

COLOMBIA: VIOLENCIA Y DEMOCRACIA*

Daniel Pécaut

Traducción de Luis Alberto Restrepo**

Ni las hostilidades entre las fuerzas armadas y las guerrillas, y ni siquiera la violencia entre los grupos paramilitares y las diversas organizaciones de izquierda, implican que en Colombia esté en vías de producirse una polarización social y política del conjunto de la sociedad, salvo en algunas regiones. La mayoría de la población parece más bien asistir, como espectadora impotente, a un fenómeno que desborda con mucho los límites de una confrontación política.

Desde 1985, la violencia propiamente política es ciertamente responsable de la muerte de 700 cuadros o militantes de la Unión Patriótica (UP), partido legal próximo al Partido Comunista y de las FARC, de más de 200 miembros de la CUT, la confederación sindical creada en 1986, de centenares de dirigentes o militantes campesinos y, además, de centenares de cuadros de los dos partidos tradicionales, sin con-

tar los numerosos desaparecidos. A lo cual es necesario añadir, evidentemente, las víctimas de las acciones propiamente militares que oponen fuerzas del orden y guerrillas, cuya cifra anual sobrepasa el millar, también desde 1985.

LA "GUERRA SUCIA": ¿CRISIS DEL REGIMEN?

Esta violencia política presenta sin embargo, una gran complejidad. La participación mayor de los narcotraficantes que con frecuencia están en el origen de los grupos paramilitares y que han sido los artífices de algunos de los asesinatos que más han conmovido a la opinión pública, como el de Jaime Pardo Leal, presidente de la UP, en noviembre de 1987, así como de las masacres colectivas perpetradas en Urabá y en otras regiones, es un dato que, a partir de 1984, concurre a la difusión de la "guerra sucia", según el término ya consagrado en Colombia. En esta guerra, los desafíos económicos se combinan con los problemas sociopolíticos. Pero la opinión pública no es menos sensible al ascenso de una "violencia ordinaria" que se deriva aparentemente de la "delincuencia común" y que no ahorra ni siquiera a las grandes ciudades. Las estadísticas sugieren que esta violencia produce diez veces más víctimas que la violencia política. En realidad, es dudoso que sea fácil trazar una línea de sepa-

* "Colombie: Violence et Démocratie", en *Revue Politique et Parlementaire*, 91 (940, abril 1989, p. 59-73.

A pesar de haber sido escrito hace más de dos años y aunque la evolución política colombiana ha modificado muchas situaciones, sin embargo, el artículo de Daniel Pécaut sigue teniendo actualidad y sintetiza algunas de las tesis principales que inspiran sus conocidos trabajos sobre Colombia. Daniel Pécaut es sociólogo, investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y especialista en Colombia y Brasil.

** Filósofo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

ración clara entre una y otra violencia. Secuestros, extorsiones, arreglo de cuentas se insertan en la lógica de ambas y pueden ser fácilmente atribuidas a cualquiera de las dos rúbricas. Acontece, además, que la curva de la violencia ordinaria se aceleró en el momento mismo en el que la situación política se degradaba. Hablar de "violencia generalizada" es indicar precisamente que, en la coyuntura actual, elementos de órdenes diferentes tienden a entrar en resonancia y producen consecuencias contradictorias: exacerbaban una conflictividad difusa y fragilizan a los actores sociales; así mismo, suscitan, en ciertos casos, una extrema radicalización política y confunden, además, lo que pertenece a lo político con lo que no le pertenece. Otras tantas características de una crisis aguda. Esta existiría ya, si sólo se tratara de un enfrentamiento entre el régimen y las guerrillas. Lo es aún más desde el momento en que la violencia se traduce también en descomposición del tejido social en las zonas rurales y urbanas, y que el régimen se encuentra incapacitado para hacerle frente a la atomización resultante. Parece próxima a una crisis del régimen cuando se comprueba, además, que una institución tan fundamental como la de la justicia se ha desmoronado, de tal manera que, en la vida corriente, los ciudadanos no pueden apelar al derecho, y el gobierno civil se ve obligado a conceder una amplia autonomía a las fuerzas del orden.

La paradoja, sin embargo, consiste en que, en muchos otros planos, la estabilidad colombiana da la sensación de continuar intacta. En el campo económico, Colombia puede enorgullecerse de haber escapado en el curso de los últimos diez años al desastre experimentado por la mayor parte de los países de América Latina. Habiendo cedido en menor medida a los vértigos del endeudamiento y disponiendo de nuevos recursos de exportación —petróleo, banano, flores, oro, níquel, carbón... y cocaína—, Colombia no se ha visto amenazada, salvo en 1984, por el desequilibrio en la balanza de pagos y ha mantenido una tasa muy elevada de crecimiento por habitante: desde 1980 hasta 1987, según las cifras de la OIT, la tasa promedio ha sido de 5.3% al año. A partir de 1986 se produce también un nuevo impulso industrial con una tasa de progresión del crecimiento muy superior a la media histórica. Los dirigen-

tes económicos han ido hasta el punto de estimar que nunca se habían presentado perspectivas tan favorables. Muchos de los asalariados se han beneficiado de este crecimiento: desde 1980 hasta 1987, siempre según la OIT, el salario industrial ha aumentado su valor real en un 19.3%, mientras que el salario agrícola lo ha hecho en un 21%.

En el campo de la política institucional tampoco se ha producido ningún sacudimiento profundo. Las elecciones se han sucedido regularmente. Los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, continúan recogiendo los sufragios de más del 90% de los votantes. La izquierda, a pesar de sus esfuerzos, aún no llega a dotarse de un electorado consistente: reuniendo todas las tendencias, no alcanza todavía sino a un 3 ó 4.5% de los votos. En marzo de 1988, se celebraron por primera vez elecciones para designar a los alcaldes, hasta entonces nombrados por las autoridades gubernamentales. Bien implantada localmente, en esta ocasión la izquierda esperaba salir de la marginalidad. Sin embargo, a pesar de las alianzas con las listas conservadoras o liberales, no alcanzó sino al 4.5% de los sufragios. Y hay que añadir que este porcentaje se lo debió, en gran parte, a un electorado rural o semirural, mientras que en una ciudad clave como Bogotá, la izquierda reveló una vez más su debilidad. En cuanto a la abstención, que a fines de los años 70 alcanzaba niveles récord sobre todo en las metrópolis urbanas (más del 80% en Bogotá en 1976) y que arriesgaba con privar a los gobernantes de legitimidad, retornó luego a cifras que se sitúan en los alrededores del 50% y corresponden a la tradición colombiana. Los dos presidentes que se han sucedido desde 1982, Belisario Betancur y Virgilio Barco, han tenido que enfrentar problemas delicados con la clase política. El primero apenas si obtuvo su apoyo para lanzar y realizar su plan de paz; el segundo provocó dudas y escepticismo. Tanto el uno como el otro se han visto, además, confrontados a momentos trágicos: la matanza del palacio de justicia en noviembre de 1985, en la cual desapareció la mitad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y puso fin a las negociaciones con las guerrillas; los asesinatos en serie de personalidades de primera línea a fines de 1987 y comienzos de 1988, entre los cuales se cuentan Jaime Pardo Leal y el procurador general de la

nación; los secuestros de figuras de talla, como el hijo del ex-presidente Pastrana y, sobre todo de Alvaro Gómez Hurtado, uno de los líderes históricos del partido conservador. A pesar de la adopción de cientos de medidas de excepción se han preservado aparentemente las libertades esenciales. Los partidos de izquierda, incluso aquellos que tiene reconocidos vínculos con ciertas guerrillas, pueden celebrar congresos y distribuir sus periódicos. Es verdad que estas libertades pueden parecer ridículas cuando los dirigentes son cotidianamente asesinados. Sin embargo, el régimen colombiano no ha caído en la dictadura. Así mismo, hemos dicho que los civiles han tenido que conceder a los militares un amplio margen de acción. Pero Belisario Betancur y Virgilio Barco pudieron, sin embargo, tanto el uno como el otro, tomar una decisión que pocos jefes de Estado latinoamericanos tienen la posibilidad de adoptar: deshacerse de los ministros de defensa que representan a las fuerzas armadas en el seno del gobierno, abiertamente hostiles a su política. La tradición civilista del país no ha perdido, por lo tanto, todo su vigor.

Estas comprobaciones no apuntan a atenuar la importancia de las que se refieren a la violencia generalizada. Están destinadas a prevenir, de entrada, las conclusiones apresuradas que podrían derivarse de las últimas consideraciones. A pesar de su intensidad, la violencia no ha entrabado por completo todos los mecanismos económicos y políticos. Más allá de esta simple observación, constituyen una manera de plantear el interrogante que intriga a todo observador de Colombia: ¿cómo comprender la combinación de procedimientos ampliamente democráticos y de fenómenos de violencia a la vez explícitos y difusos? El interrogante no es suscitado solamente por la crisis actual. Después de todo, el Frente Nacional, aquella fórmula de entendimiento entre los dos partidos tradicionales puesta en práctica desde 1958, asegura desde hace tres décadas una excepcional continuidad de las formas políticas. Pero el Frente Nacional es el producto de la "violencia" y estuvo acompañado de una permanente violencia larvada. Esto no significa que la situación reciente no tenga componentes originales. La violencia en curso no es únicamente la prolongación de la antigua: la multiplicidad de focos guerrilleros y la intervención de los nar-

cotraficantes bastan para probarlo. Ello no obsta para que las estructuras democráticas, tal como existen en Colombia, y la violencia, parezcan ampliamente indisociables. Y que la "guerra sucia" que prevalece en este momento no se arraigue sin duda, únicamente, en las tensiones sociales ni en las tendencias a la anomia. Manifiesta también que, para diversos sectores colombianos, la política y las luchas sociales no pueden ser dirigidas por un sistema de regulación democrática sino que pasan por el uso de la fuerza. Quizás ello da lugar a una amplia aceptación tácita de la violencia como modalidad normal y legítima de las relaciones sociales en el cuadro de un régimen que no tiene ni los medios ni quizás la voluntad de someterlas a reglas de negociación.

¿"DEMOCRACIA RESTRINGIDA" O PRECARIEDAD DEL ESTADO NACIONAL?

La mayor parte de los estudios consagrados a la ola actual de violencia imputan la responsabilidad de ella a las reglas limitativas, implícitas o explícitas, que presiden el funcionamiento del sistema político colombiano desde los inicios del Frente Nacional. Bajo las apariencias de una democracia, este sistema disimularía un carácter fundamentalmente excluyente o autoritario: algunos evocan una privatización del poder en beneficio de la oligarquía; otros un régimen autoritario comparable al de México; otros más un Estado cada vez más sometido a los militares. La mayor parte habla cuando menos de "democracia restringida", y esta expresión ha llegado a ser parte del lenguaje político corriente. De allí a presentar la lucha armada como la única vía que se ofrece a la oposición no hay sino un paso que muchos dan alegremente. La argumentación es, sin embargo, más que discutible.

No se trata de negar las restricciones aportadas a la vida política por la fórmula del Frente Nacional, oficialmente en vigor desde 1958 hasta 1974, pero ampliamente prorrogado hasta 1986. Las limitaciones son de múltiples tipos. Unas son el producto de la revisión del texto constitucional, adoptado por una mayoría de más del 80%, mediante el referéndum de 1958. Consisten en disposiciones, establecidas

para un lapso de dieciséis años, que reservan a los dos partidos tradicionales la posibilidad exclusiva de concurrir a las elecciones, atribuyéndoles de oficio una representación paritaria en el gobierno, en el Congreso, en las asambleas departamentales y en todas las instancias administrativas y prevén su alternación automática en la presidencia. A partir de 1974, la competencia electoral vuelve a abrirse, pero los efectos de esta apertura se ven amortiguados por una disposición introducida en 1968, según la cual, los dos partidos tradicionales continuarán teniendo, después de la expiración del Frente Nacional, una representación proporcional a sus resultados en el seno del conjunto de la administración y en el ejecutivo. De este modo, hasta 1986, el gobierno nacional, los poderes locales y todos los puestos públicos han sido distribuidos entre los dos partidos. Otras restricciones se desprenden de los procedimientos de excepción, de los cuales los sucesivos gobiernos han usado y abusado. En particular, el estado de sitio ha sido aplicado casi sin interrupción. Si, en algunos casos, estaba destinado solamente a permitir obrar por decretos ley a los gobiernos amenazados de parálisis por las divisiones del Congreso, en otras ocasiones era proclamado en nombre del mantenimiento del orden público y servía para reprimir a los movimientos sociales y a las organizaciones populares, dotando a los militares de facultades extraordinarias. Existen, finalmente, restricciones que se ajustan simplemente a las facilidades que la fórmula del Frente Nacional ofrece a una élite política reducida para controlar el juego electoral, así sea solamente poniendo los recursos públicos al servicio de las clientelas, y para ejercer una influencia decisiva sobre la gestión gubernamental. Poco importa que el Congreso, con mayor frecuencia aún que el ejecutivo, se haya mostrado reticente hacia reformas de envergadura, como los programas de reforma agraria lanzados en 1961 y retomados en 1968, y los proyectos de reforma urbana por los que hubieran podido afectar la distribución de los ingresos. El hecho es que, globalmente, el Frente Nacional se mostró ante todo cuidadoso de los intereses de los sectores dominantes. La conclusión parece, pues, imponerse por sí misma: el régimen se ha visto progresivamente despojado de una verdadera legitimidad. La tasa de abstención electoral sería un primer

índice de ello. La debilidad de los porcentajes obtenidos por la oposición de izquierda desde 1970, constituiría el segundo. Si sigue siendo tan acentuada es porque el régimen dispone de todos los instrumentos, desde las redes clientelares hasta la coerción, pasando por la propaganda, para impedir a los grupos inconformes su expresión política.

Conviene, sin embargo, aportar algunos matices a este cuadro. Al inicio, en todo caso, como lo demuestran los resultados del referéndum de 1958, el Frente Nacional fue visto como un procedimiento destinado a prevenir todo resurgimiento de la guerra civil entre los dos partidos tradicionales —aún si la “Violencia” de entonces, como la violencia actual, estaba hecha de una multiplicidad de fenómenos, fue vivida ante todo como una guerra entre partidos— y para volver a los militares a sus cuarteles después del intermedio del gobierno del general Rojas Pinilla, entre 1953 y 1957. El Frente Nacional pertenece a la especie de los acuerdos “consociacionales” que se encuentran con frecuencia en países fragilizados por tensiones culturales o religiosas. El pacto no falló en sus objetivos inmediatos: los enfrentamientos partidarios se apaciguaron y los militares se sometieron al menos hasta 1967, a la ley de la supremacía civil mejor que en ningún otro país del sub-continente, y retornaron a la tradición anterior a la “Violencia”. Estos dos resultados no son despreciables. Además, la fórmula no ahogó toda vida política. Tenía todas las características necesarias para engendrar en el seno de cada partido innumerables fracciones, decididas a obtener su tajada de prebendas y empleos, y la fórmula no dejó de obtener estos resultados. No excluía tampoco la posibilidad para la izquierda de tentar fortuna, siempre y cuando lo hiciera bajo la bandera de un partido tradicional, y el Partido Comunista lo intentó constantemente. Era apta, además, para suscitar protestas, incluso entre los fieles de los partidos tradicionales, lo que se produjo bajo dos circunstancias diferentes: el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), formado por Alfonso López Michelsen, que reunía hasta su extinción por adhesión al régimen en 1967, numerosos militantes populares, antiguos guerrilleros de la “Violencia”, sindicalistas, etc.; la ANAPO, más todavía, que, bajo la dirección del general Rojas Pinilla y recurriendo a un lenguaje popular, a la

vez contestatario y conservador, conquistó a todo lo largo de los años 60 la confianza de los más pobres, cristaliza una separación social sin precedente entre los de abajo y los demás, y obtiene en la elección presidencial de 1970 resultados tan próximos a los de la coalición del Frente Nacional, que de allí en adelante planeará una sospecha de fraude sobre la victoria finalmente acordada a éste. Ya pasados los acontecimientos, es fácil afirmar que estos dos movimientos de protesta fueron útiles, en definitiva, al Frente Nacional para canalizar todos los descontentos. Esto es verdad, ciertamente, porque el post-Frente Nacional, a partir de 1974, padecerá de la desaparición de tales oposiciones de masas, al haberse hundido la ANAPO en aquella fecha sin que fuera luego reemplazada. Gracias a estas oposiciones, el Frente Nacional permaneció, en efecto, más abierto de lo que preveían las disposiciones constitucionales.

Sorprende que las quejas a propósito de las "restricciones" democráticas y la seducción renovada de la lucha armada en ciertos sectores se hayan manifestado precisamente después de 1974, cuando caducaba la mayor parte de las reglas limitativas. Es el momento en el que una nueva organización que preconiza el recurso a las armas, el M-19 (Movimiento diecinueve de abril, por alusión a la fecha electoral de 1970, considerada como fraudulenta) se organiza alrededor de cuadros jóvenes salidos de las FARC, del Partido Comunista y de la ANAPO, que presentan la particularidad de haber iniciado con frecuencia estudios universitarios. Pero es también el momento en el que las luchas sociales agrarias y urbanas toman una nueva dimensión: se desarrollan las invasiones masivas de tierras, promovidas en 1971 y 1972 por la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), primer movimiento campesino de talla nacional desde los años 20; se multiplican duras huelgas e intentos de paro general en 1969 y 1971; proliferan, a partir de 1974, los movimientos urbanos que, bajo la modalidad de "paros cívicos", paralizan las ciudades para obtener el mejoramiento de los servicios públicos. ¿Cómo explicar que la izquierda no logre, sin embargo, tomar el relevo de la ANAPO e imponerse como fuerza política electoral? Ni el clientelismo de los partidos tradicionales ni las presiones diversas bastan para

explicarlo. Es más que posible que la extrema radicalización de una izquierda que considera normal "la combinación de las diversas formas de lucha", según la expresión consagrada por el Partido Comunista, y su extrema división que conduce a dar la primacía a las querellas internas sobre el combate contra el régimen, no sea extraña a los resultados electorales y a la ineptitud de la izquierda para recoger los frutos de las luchas sociales. Una vez más, las restricciones democráticas sólo contribuyen parcialmente a este resultado. La intensidad de los conflictos sociales demuestra, si es necesario, que se está lejos de los regímenes autoritarios del Cono Sur.

Recíprocamente, el mantenimiento del cuasimonopolio de los partidos tradicionales desde 1974 llama la atención. Hace difícil de aceptar sin más la versión de la crisis de legitimidad. Sobre todo si se la compara con lo que acontece en el curso de los años 80 en los países del subcontinente que retornan a la democracia: el desgaste de los gobernantes reviste allí otra dimensión muy diferente y los altercados con los militares tienen un impacto muy distinto. Pareciera que los dos partidos tienen vocación para regir la política colombiana. Indudablemente los hábitos que provienen de las tradiciones familiares o locales, así como los relatos de la historia y sobre todo de la "Violencia", ejercen, todavía, una gran influencia. Pero en una Colombia marcada por una urbanización ya preponderante y por incesantes transferencias de población en todas las direcciones, la persistencia de los partidos no debe analizarse únicamente a partir de la socialización antigua. Ciertamente, es necesario tener en cuenta los manejos clientelares: estos han evolucionado en el período reciente y las lealtades tradicionales han cedido el paso a las concepciones instrumentales, a veces cínicas y costosas, que poderosos barones locales ponen al servicio de sus ambiciones. Pero, en época reciente, ha emergido también un comportamiento electoral moderno que conduce a una parte de los electores a deslizarse de un partido al otro en función del candidato: no pocos liberales contribuyeron al éxito del conservador Belisario Betancur en 1982, porque les parecía mejor para abrir el diálogo con los insurgentes; no pocos conservadores adhirieron al liberal Virgilio Barco en 1986, porque les parecía más con-

fiable que su candidato, Alvaro Gómez Hurtado. No es falso que la abstención, cuando alcanza su récord en 1976, 1978 y 1980, afecte la credibilidad del sistema. Pero la participación vuelve a subir desde 1982 a tasas que para Colombia son normales. Cuando se desinflan los bolsones de abstencionismo, resulta, al contrario de lo que lo permitirían suponer las interpretaciones de la izquierda, que los partidos tradicionales son los que sacan provecho de ello. Estos partidos se muestran, pues, por el momento, susceptibles de enfrentar los cambios de la sociedad colombiana. Esto era tanto menos evidente cuanto que, en 1958, su influencia sobre la población reposaba, más allá de los sentimientos heredados de pertenencia, sobre el papel tutelar del orden social concedido a una Iglesia católica que, a pesar de su compromiso al lado del partido conservador durante la "Violencia", continúa siendo reconocida como guardiana de los valores privados y colectivos. Junto a los dos partidos tradicionales, era el tercer pilar del Frente Nacional, pero su autoridad se diluye a partir de 1965-1966. Frente a la evolución de las mentalidades y de las condiciones de vida, la Iglesia no logra inventar nuevas maneras de hacerse escuchar. A pesar de todo, los dos partidos mantienen su hegemonía.

Las restricciones del funcionamiento democrático, desde 1958 hasta 1974, son, pues, bien reales. Dejemos por ahora de lado las que se produjeron por el aumento del margen de maniobra de los militares a partir de 1977-1978. Tomarlas en cuenta en este punto de la exposición, equivaldría a encerrarnos en el debate sin salida sobre la anterioridad de la lucha armada o de la represión militar. Los múltiples espacios que el Frente Nacional y el post-Frente Nacional dejan abiertos, tanto en el ámbito político como el plano social, son tan significativos como sus restricciones, según nuestro parecer. De aquí se deriva un problema: una movilización política y social evidente que, sobre todo en razón de la inercia de las adhesiones partidarias pero también por las interferencias de la izquierda con la guerrilla, no desemboca en una expresión política institucional estable. Es esta mezcla de espacios abiertos y de movilización incoherente y dispersa la que resulta realmente explosiva. Por el contrario, atribuir la generalización de la vio-

lencia a la estrechez del régimen nos parece discutible por un triple título. Desde el punto de vista teórico, equivaldría a sostener la tesis banal y tan frecuentemente desmentida, según la cual, las situaciones de insurgencia nacieran casi naturalmente de la carencia de canales de participación, cuando en realidad, la tesis opuesta es igualmente plausible e igualmente insignificante. En lo que concierne al diagnóstico político, éste lleva a no ver en la violencia sino un fenómeno político simple que opondría a los partidarios de las "reformas democráticas" (fórmula cuyo significado es, como se sabe, tan elástico como un acordeón) a los defensores del statu quo, lo que no es sino una imagen caricaturesca de las confrontaciones en curso. Finalmente, esta tesis tiende a hacer del Frente Nacional el disfraz político de un Estado que controlaría fácilmente la sociedad. Pero esta visión nos parece más bien un rechazo a tomar en consideración el factor central de la historia colombiana y que sirve de contexto a la recurrencia de la violencia: la precariedad del Estado-Nación.

Ciertamente, todos los comentarios reconocen ciertos rasgos de esta precariedad. Así, por ejemplo, admiten que la autoridad del Estado no se ejerce en una vasta porción del territorio nacional y en particular en la mayor parte de las zonas de colonización que fueron, con frecuencia, teatro de la "violencia" de los años 50 y que, marcadas por una rápida extensión desde hace dos décadas, son todavía en buena medida los principales focos de la violencia actual. Raros son los procesos de colonización que no comportan por sí mismos una dimensión de violencia. A fortiori, es este el caso cuando el Estado no se preocupa por instalar puestos de policía y menos aún equipamiento público en inmensas regiones y deja el campo libre al uso privado de la fuerza, así como a organizaciones que, como los numerosos frentes de las guerrillas actuales, se erigen en instituciones sustitutivas.

Este no es, sin embargo, sino un aspecto de la precariedad del Estado-Nación. Esta reviste un carácter mucho más general. Acontece que el Estado colombiano, que no pudo consolidarse en el siglo XIX en la tormenta de las guerras civiles nacionales y locales, no se afirma tampoco verdaderamente a lo largo del período de

1930-1945, al contrario de lo que se produjo en la mayor parte de los países vecinos. Las razones son simples. Ni la simbología del intervencionismo económico, ni la simbología del intervencionismo social, que suelen servir de justificación para afirmar la influencia del Estado sobre la sociedad, tienen las condiciones requeridas para imponerse en Colombia. La economía del café no adquirió su impulso decisivo sino en los años 20. A pesar de la depresión de los años 30, el dinámico sector agroexportador no se vio acorralado, como su homólogo, a recurrir al Estado para limitar sus perjuicios. Fue mucho más racional para él adherirse al "laissez faire" y aumentar la producción, puesto que el Estado brasileño se encargó de sostener los precios del café y le ofreció la oportunidad inesperada de incrementar su participación en el mercado. En suma, el Estado brasileño sirvió directamente a los intereses de los exportadores colombianos. Esta no fue una simple peripecia momentánea. En adelante, el conjunto de las élites económicas colombianas se mostrará decidido, en nombre del liberalismo económico, a rechazar toda delegación duradera de poder al Estado en el ámbito de la gestión económica. En cuanto al intervencionismo social, en nombre del cual numerosos Estados latinoamericanos han puesto bajo su control a los sindicatos y se han proclamado como portaestandartes del interés general por encima de los intereses particulares, es bien conocido el inicio de su aplicación, de 1934 a 1936, bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Pero la significación de este intento fue completamente distinta porque no fue puesto al servicio de la consolidación del Estado, sino al servicio del partido en el poder, en este caso el Partido Liberal que deseaba asegurarse los votos del electorado urbano. La implantación de los partidos tradicionales constituye, por lo demás, otra fuente de la debilidad del Estado Nacional. El cuerpo social aparece definitivamente dividido entre estos dos partidos que son también subculturas y que definen, cada uno por su cuenta, el contenido de las identidades colectivas. No queda, en verdad, lugar ni para una imagen de Nación unificada ni para un Estado independiente de los partidos.

Estas son las bases sobre las que se asentó la sociedad colombiana para avanzar en el siglo

XX, sin que las estructuras y la concepción del Estado hayan sido profundamente alteradas. Esto ha contribuido tanto a la continuidad de las formas democráticas, como a la irrupción reiterada de la violencia. El Frente Nacional se inscribe en este doble registro.

La precariedad del Estado favorece las formas democráticas de muchas maneras. Priva a los militares o a las corrientes autoritarias civiles de un punto de apoyo, y dificulta el desarrollo del populismo político. Incluso el movimiento gaitanista de 1944-1948 no llegó a formular una mística nacionalista ni a salirse realmente del Partido Liberal. Impide igualmente la tentación del populismo económico: los gremios representativos de los principales intereses económicos están ahí para hacerle frente a las eventuales debilidades de la clase política y para hacer respetar un estilo muy ortodoxo de política económica. Antes, durante y después del Frente Nacional, Colombia ha velado siempre por contener la inflación dentro de límites aceptables, incluso sacrificando el gasto público y las inversiones, y manteniendo una distribución muy desigual de los ingresos. Nada que ver con las doctrinas voluntaristas y con las reacciones políticas que acompañan su crítica, y que A.O. Hirschman ha descrito a propósito del Brasil. Colombia deja, por lo demás, a los partidos tradicionales entregarse a regateos que no les permiten concebir casi ningún proyecto nacional. A lo largo del Frente Nacional la repartición de todas las instituciones entre las corrientes y subcorrientes de estos partidos impidió cualquier modernización significativa del Estado. A veces se mencionan las reformas administrativas de Carlos Lleras Restrepo, en 1968, como si estas hubieran concentrado todos los poderes en manos del ejecutivo, provocando así la aparición de una sólida tecnocracia. Basta, sin embargo, considerar la suerte de algunos proyectos ambiciosos para comprobar que el ejecutivo está expuesto a los vetos del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, y que los tecnócratas no tiene sino un margen de acción restringida, a pesar del innegable refuerzo del papel económico del Estado. Naturalmente, las "formas democráticas" que resultan de estos factores no son necesariamente exaltantes: no hacen concesiones a la "voluntad popular" ni a un "esquema generador" igualitario. Reposan sobre miniajustes entre frac-

ciones y miniadaptaciones a las circunstancias sobre restos de tradiciones y sobre asentimientos arrancados como única alternativa a la violencia.

Porque la precariedad del Estado nacional permite que, simultáneamente, aflore sin cesar una violencia proteiforme. La carencia de una simbología de la unidad nacional, la ausencia de mecanismos constantes de regulación social, el fraccionamiento espacial de los poderes, son otros tantos factores que ponen al descubierto una conflictividad que circula libremente a través del tejido social. En ciertos momentos esta conflictividad reviste un carácter predominante político. Esto es cierto antes del Frente Nacional, cuando el cuerpo social parece naturalmente dividido entre las dos comunidades partidarias, continúa siendo cierto de modo más complejo durante el Frente Nacional que, habiendo sido experimentado como una fórmula de transacción transitoria y no como una redefinición de la colectividad nacional, da testimonio más bien de que, a cada instante, pueden reabrirse grietas. Los dirigentes sucesivos del Frente Nacional no fueron, además, los últimos en enarbolar, a cada elección, la alternativa de "coalición de los partidos tradicionales o violencia", como si esta última pudiera subvertir de nuevo las instituciones. Con este procedimiento expresaban el sentimiento de aquellos que habían sufrido, directamente o no, la experiencia de la "Violencia". La conflictividad es susceptible, en otros momentos, de atravesar sobre todo las relaciones sociales. El Frente Nacional se constituye en condiciones marcadas por la desorganización de las clases populares surgida de la "Violencia": un campesinado que había sufrido, además de los asesinatos masivos, desplazamientos de grandes proporciones; una clase obrera que había sido arrancada de los antiguos sindicatos. Confortado por esta situación y deseando prolongarla mediante la sumisión de las organizaciones que se reconstituían bajo la tutela de los dos partidos, el Frente Nacional no se esforzó por crear mecanismos de mediación institucionalizada y abandonó sobre todo los conflictos rurales a su suerte, y luego se dejó sorprender, a partir de 1974, por la oleada de protesta urbana. Desde entonces, la prueba de fuerza desembozada se convirtió en una salida tanto más frecuente cuanto que muchos de los

protagonistas, al menos en las zonas rurales, consideraban como un recurso legítimo, tanto los asesinatos a sueldo como la "autodefensa".

Hacia el final de los años 70, algunos sindicatos de extrema izquierda se vieron atraídos hacia el horizonte de la lucha armada. En suma, la violencia pasa libremente al centro de lo social. El fraccionamiento espacial contribuye también a nutrir esta conflictividad difusa o abierta. En el transcurso de la "Violencia", las confrontaciones se desarrollaron en una pluralidad de espacios inconexos. El fraccionamiento siguió prevaleciendo después, tanto en el caso de las luchas agrarias (un poco menos durante la breve intervención de la ANUC pero esta se ejerció, sin embargo, sobre todo en los departamentos de la Costa Atlántica, y aún allí con modalidades muy heterogéneas de un lugar a otro) —como en los casos de las luchas sindicales, de las huelgas y de los paros cívicos, a pesar de algunos esfuerzos de coordinación. De allí los límites de esta movilización social fragmentaria y poco organizada. De allí también la eventual violencia de choques encerrados en su aislamiento. Pero sobre todo, la precariedad del Estado ha mantenido en definitiva un abismo entre la protesta social y la protesta política. La experiencia demuestra que, en América Latina, surgen actores sociales estables y tienen influencia política cuando encuentran frente a sí a un Estado que, bien sea para cooptarlos o bien para insertarlos en un sistema semicorporativista, se presenta como interlocutor central. No acontece así en Colombia, lo que engendra un contexto en el cual los movimientos sociales y las vanguardias radicalizadas se encuentran durante breves períodos antes de separarse de nuevo. La impaciencia y la intransigencia de las vanguardias producen frecuentemente el repliegue o incluso la dislocación de los movimientos sociales. La ANUC, como se ha visto, no se quebró solamente a causa de la represión militar o privada. Sucumbió también a la acción de los núcleos urbanos o semiurbanos que se habían apoderado de su dirección y que, arrastrándola de aquí para allá, pretendían convertirla en fuerza revolucionaria y prohibir a los campesinos la comercialización de sus productos o la titulación de las tierras conquistadas. Sin duda, los comentaristas insisten frecuentemente sobre la persistencia de "grupos de autode-

fensa" campesinos, creados por iniciativa del Partido Comunista durante la "Violencia", integrados luego a las FARC (las guerrillas fundadas por el PC ortodoxo en 1966) y que participaron en lo que fue calificado como "colonización armada" hacia las regiones pobladas a partir de 1970. A propósito de este caso, no hay lugar para evocar un abismo entre lo social y lo político, sino más bien su perfecta fusión. Sin embargo, nos parece una ilusión querer analizar las guerrillas actuales como una generalización de los grupos de autodefensa. Estos nunca lograron reunir sino un número reducido de efectivos y existe un abismo considerable entre las familias campesinas que tratan de sobrevivir y las guerrillas que obran como si el problema del poder estuviera ya planteado.

Al poner el acento sobre la significación de la precariedad del Estado, pretendemos indicar que esta es susceptible —mejor quizás que la tesis de la "democracia restringida"— de explicar la posibilidad de un fenómeno como el de la violencia, en el cual se entremezclan de manera inseparable confrontaciones sociales y políticas muy concretas, desorganización social, movimientos sociales y acciones políticas de ruptura, una versión de la historia en la cual la fuerza bruta es en definitiva soberana. Efectivamente, el Frente Nacional estuvo acompañado de una dosis considerable de violencia. De allí a concluir que la violencia generalizada actual no es sino su continuación, sería singularmente apresurado. Es inevitable que haya algunas continuidades. Pero las discontinuidades nos parecen mucho más significativas.

¿INSURRECCION SOCIAL, GUERRA REVOLUCIONARIA O VIOLENCIA GENERALIZADA?

En 1974, la elección a la presidencia de Alfonso López Michelsen, antiguo jefe del MRL, permite hacer buenos augurios del post-Frente Nacional. La agitación agraria en 1971-1972 ha retrocedido ampliamente, la acción sindical da traspies, la guerrilla está en reflujo. El ELN, de inspiración guevarista, había sufrido en 1973 una derrota militar que acentúa la desmoralización de sus miembros; el EPL, de inspiración maoísta, paga el precio de haber querido imponer a los campesinos de la Costa Atlántica,

entre los que se estableció, consignas demasiado brutales; las FARC están acantonadas en sus antiguos bastiones campesinos; en cuanto al M-19, sólo en 1975 procede a realizar su primera acción de propaganda, en este caso el asesinato del presidente de una Confederación Sindical ampliamente desacreditada. Prometiendo la reducción de la brecha entre las dos Colombias y reconociendo oficialmente la Confederación Sindical Comunista, Alfonso López Michelsen da la impresión de querer comprometerse en la vía de la reforma social. Los paros cívicos que proliferan a partir de 1974-75, y la oleada de huelgas obreras y de empleados en 1975 muestran, sin embargo, el ascenso de la movilización social. Frente a un alza sin precedentes del precio del café, López da prioridad a la lucha contra la inflación en detrimento de las inversiones y de la justicia social. El 14 de septiembre de 1977, un paro general adquiere el aspecto en los barrios periféricos de Bogotá de una insurrección repentina. Sorprendidas, las fuerzas del orden reaccionan de manera improvisada, dejando un balance de una veintena de muertos. Desde muchos puntos de vista, esta huelga marca el viraje hacia una nueva fase de confrontación. Las guerrillas vuelven a pasar a la ofensiva. El M-19 emprende, por primera vez, operaciones urbanas en 1978 y 1979 y luego, una vez desmanteladas sus redes, despliega efectivos considerables en el sur de Colombia, sobre todo en el Caquetá, que en 1980-81 se convierte en el teatro de amplias confrontaciones militares. Las FARC abandonan las tácticas defensivas, multiplican las emboscadas y se proponen crear nuevos frentes. El ELN renace progresivamente y el EPL se esfuerza por reconquistar sus bases campesinas. Aparecen grupos terroristas. El régimen reacciona brutalmente. Los militares hacen oír su voz como no lo habían hecho nunca. Después del paro general, los generales en retiro dirigen una advertencia solemne al gobierno y se adoptan las primeras medidas de excepción cuando todavía Alfonso López Michelsen está en el poder. Su sucesor, Julio César Turbay, no se para en escrúpulos. Retoma por su cuenta la exigencia militar de un Estatuto de Seguridad que autoriza medidas arbitrarias, cierra los ojos ante los métodos utilizados para liquidar las redes urbanas de la guerrilla, da su consentimiento a una vasta contraofensiva militar en el sur del país y

estima que es posible liquidar a la guerrilla por la fuerza.

La opinión colombiana es completamente consciente de que se abre una nueva coyuntura. Las operaciones de las guerrillas tienen una repercusión nacional como no la habían tenido jamás. Además, el M-19 llega a suscitar la simpatía de sectores antes reticentes ante la lucha armada: al estilo de los Tupamaros de la primera época, toman iniciativas espectaculares y lanzan profesiones de fe con acentos populistas que rompen con el "argot" de las demás organizaciones. Son ellos quienes difunden las críticas contra la "democracia restringida" y, afirmando que no existe por el momento otra alternativa que la acción guerrillera, reclaman una "apertura democrática" que les permitiera transformarse en partido de oposición legal. El eco de estas proclamas es tanto más considerable cuanto que una gran parte de la opinión está inquieta por las medidas de excepción y por la incursión de los militares en el terreno político. El proceso de paz, iniciado desde agosto de 1982 por el sucesor de Turbay, Belisario Betancur, es acogido con gran esperanza, aún si la mayoría de la clase política y sobre todo los militares expresan enseguida sus reticencias o incluso su franca hostilidad a este propósito. Las dificultades se manifiestan efectivamente como mucho más fuertes de lo que se había previsto. Ni el levantamiento del estado de sitio decidido por Turbay poco antes de la expiración de su mandato, ni el fin del Estatuto de Seguridad, ni la amnistía incondicional que produce enseguida la liberación de casi todos los guerrilleros encarcelados, ni los diálogos oficiales y oficiosos con todas las tendencias de la izquierda, logran convencer a las guerrillas de suspender los combates ni a los militares de renunciar a una solución de fuerza.

Los años 1982-1983 ven cómo las FARC y otras organizaciones armadas implantan nuevos frentes en muchas regiones. Prosiguiendo la lucha, el M-19 pierde progresivamente el capital de prestigio acumulado. La obstinación de Betancur se ve recompensada, sin embargo, en 1984: para sorpresa general, las FARC aceptan firmar de primeros un cese al fuego; el M-19 y el EPL hacen después otro tanto. Solamente el ELN se niega a ello. Ciertamente, los acuerdos son particularmente imprecisos. Además de la

suspensión de los combates, las tres guerrillas no se comprometen prácticamente a nada, mientras que el gobierno promete diálogo político y reformas sociales con un programa tan vago que se presta a todos los malentendidos. En pocos meses, el clima se degrada nuevamente. Numerosos guerrilleros amnistiados o cuadros de izquierda caen víctimas de asesinatos, los campamentos de los guerrilleros son atacados por el ejército pero, asimismo, las FARC y otras organizaciones, al abrigo del cese al fuego, continúan multiplicando los frentes y reclutando combatientes. En 1985, el principal portavoz de las FARC llega incluso a publicar una obra con el título de "Cese al Fuego", en la cual afirma que no pretende en modo alguno hacer la paz sino utilizar la tregua para reforzar el potencial militar de los revolucionarios y preparar así la toma del poder en un lapso de ocho años. Por su parte, el estado mayor del M-19 cree en la inminencia de una insurrección popular para la cual el paro general previsto para el 20 de junio de 1985, daría el campanazo. La amplitud de la huelga fue muy limitada pero, algunos días antes, los cuadros del M-19 volvieron a la clandestinidad y decidieron romper el cese al fuego. El EPL procedió de modo similar. Operaciones militares y "guerra sucia" no han cesado de desarrollarse desde entonces. La tragedia del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, no hizo sino consagrar espectacularmente el fracaso del "proceso de paz" y la agudización extrema de las hostilidades. De la tregua no subsiste sino una ficción: las FARC y el gobierno hacen como si, en lo que les concierne, el cese al fuego estuviera todavía en vigor. En 1985, se funda además la Unión Patriótica (UP) que en un primer momento se presenta como una prenda de la voluntad de las FARC de transformarse en fuerza política legal, y constituye también para el Partido Comunista un medio para intentar ampliar su campo de influencia. Esto prueba, simultáneamente, la importancia que las FARC y el Partido Comunista le conceden a la estrategia propiamente política. Al año siguiente, la resolución de este partido de desmontar la Confederación Sindical que controla para permitir el surgimiento de una Confederación Unitaria, la CUT, manifiesta la misma preocupación. La realidad es, sin embargo, la de la guerra. Los cuadros y militantes de la Unión Patriótica son el blanco preferido del terror llamado "parami-

litar" y muchos centenares de ellos, entre los cuales se cuenta Jaime Pardo Leal, dejan la vida desde 1985 hasta hoy.

Después de la elección de Virgilio Barco a la presidencia, en 1986, los diálogos con las FARC entran en un estado de somnolencia y, aunque el cese al fuego continúa oficialmente en vigor, los enfrentamientos militares se hacen más frecuentes que nunca. Las FARC, que desde 1983 añadieron a su sigla las letras EP (Ejército Popular) que indican su opción en favor de una lucha armada ofensiva, no dudan en realizar operaciones de gran envergadura. Todo permite pensar que, a pesar del terror paramilitar, las FARC-EP se comprometen cada vez más durante 1987-1988 en la vía de la revolución armada. En julio de 1987, anuncian la formación de un movimiento clandestino, la "Reunión Bolivariana del Pueblo", destinada a instalar núcleos insurreccionales en todos los barrios y lugares de trabajo. En septiembre de 1987, originan la creación de un organismo de coordinación de todas las guerrillas, comprendido incluso el ELN, con el cual las relaciones habían sido con frecuencia tumultuosas en el pasado. La "Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar" (CGSB) simboliza el paso a una nueva fase militar que busca la creación "de un gobierno popular, democrático y revolucionario".

UNO DE LOS VERDADEROS INTERROGANTES: LA ECONOMÍA DE LA DROGA

Este resumen de las principales peripecias político-militares que van a la par con la generalización de la violencia, deja de lado varios problemas. ¿Por qué esta explosión de lucha armada en un período en el que el retorno a la democracia se convierte en la norma? ¿En qué medida es el resultado de particulares tensiones sociales? ¿Cuáles son las interferencias con la economía de la droga? En el contexto de violencia generalizada ¿cómo trazar las fronteras de lo que pertenece o no a lo político? ¿Cómo analizar el funcionamiento de un sistema político confrontado a una tormenta similar? Digámoslo con una sola palabra: a cada momento vamos a encontrar la economía de la droga. Teniendo como telón de fondo la precariedad del Estado, es la economía de la

droga la que provoca la consolidación de protagonistas dotados de recursos que les aseguran formas inéditas de influencia sobre la población y, al mismo tiempo, provistos de una capacidad ilimitada para trazar estrategias que toman en cuenta todos los efectos de sus acciones.

Es evidente que siempre será posible detectar tensiones sociales en las zonas de lucha armada. Tensiones sociales de tipo "clásico", en primer término. Hemos hecho referencia a las que acompañan la colonización reciente. Pero existen igualmente aquellas, siempre a flor de piel, de las regiones de colonización más antiguas donde propietarios y colonos continúan enfrentándose: el Magdalena Medio, el Valle del Alto Sinú, ciertos sectores del departamento del Atlántico, por ejemplo.

Existen zonas de conflicto tradicionales entre poblaciones indígenas y propietarios vecinos, como el Cauca, donde la penetración de las plantaciones modernas de caña de azúcar añade nuevas presiones a las de los ganaderos. Existen casos de reivindicación de trabajadores asalariados que buscan obtener el reconocimiento de sus derechos en empresas agrícolas poderosas. En Urabá, donde se habían instalado desde los años 60 explotaciones bananeras que han hecho de Colombia el segundo país exportador de bananos del mundo, la mano de obra fue mantenida en condiciones inhumanas hasta 1984-1985, puesto que los propietarios recurrían en total impunidad a la fuerza para impedir la acción de los sindicatos.

Tensiones locales ligadas a los cambios culturales, en segundo lugar. Colombia ha conocido, como muchos otros países de América Latina, una verdadera revolución educativa en el espacio de 20 años: en las regiones rurales y sobre todo cerca de los núcleos urbanos, los niños acceden actualmente a una escolaridad secundaria. Una encuesta ha demostrado que el 80% de quienes ingresan al mercado de trabajo de las ciudades más grandes, han pasado por la enseñanza secundaria. En la medida en que las esperanzas de obtener un empleo correspondiente a esta preparación es débil, el sentimiento de injusticia se difunde. Las guerrillas reclutan frecuentemente dos categorías de combatientes: hijos de campesinos de una edad

aproximada de quince años que no quieren vivir como sus padres, o jóvenes urbanos que, habiendo terminado uno o dos años de universidad, no ven ningún porvenir en la sociedad actual.

Tensiones sociales generadas por situaciones anómicas, en tercer lugar, se producen en particular en las regiones donde recursos económicos, nuevos o no, suscitan una afluencia de trabajadores de todos los orígenes. Citemos, a modo de ejemplo, la zona esmeraldífera en manos de algunos grandes compradores que hacen reinar el terror desde hace algunas décadas o también las zonas de oro, un poco menos turbulentas. Pero los ejemplos más ilustrativos los ofrece la región de Arauca: gracias a los yacimientos petrolíferos explotados durante los últimos años, Arauca llegó a disponer de golpe de inmensos ingresos que provocaron el enriquecimiento de algunos, la desorganización brutal de la gran mayoría y la implantación de las FARC y del ELN; y desde luego, el ejemplo de las regiones donde se cultiva la coca que, como el Guaviare, han atraído con frecuencia inmigrantes en busca de fortuna fácil y han suscitado una tasa excepcional de criminalidad, hasta que las FARC se instalaron allí e impusieron el orden. Subrayemos, de paso, por encima de las diferencias, la correlación permanente entre ausencia del Estado y tensiones sociales violentas.

Fuera de los casos de situaciones anómicas, estas tensiones sociales violentas no son un dato nuevo. El fortalecimiento de la lucha armada a fines de los años 70 encontró allí puntos de apoyo, pero no "causas". El elemento que favorece la repentina multiplicación de los frentes guerrilleros es ciertamente el crecimiento de la economía de la droga y sobre todo de la coca, a partir de 1987. Existen desde luego otros productos que aseguran recursos a los grupos armados. El renacimiento espectacular del ELN a partir de 1980, está ligado a los impuestos entregados por las compañías que construyeron el oleoducto de Arauca; por lo demás, las operaciones del ELN continúan situándose en buena medida a todo lo largo de este oleoducto que el ELN vuela regularmente. Las minas de oro y las plantaciones de banano pertenecen igualmente a las zonas de influencia de las guerrillas que reciben de allí sus comi-

siones. La economía de la coca ocupa, sin embargo, lugar aparte. No solamente por los recursos económicos que les produce a las FARC que tienen la costumbre de implantarse en las zonas de cultivo cuando no están todavía instaladas allí, y siguen sus desplazamientos. Los recursos son tanto más elevados cuanto que al menos hasta hace poco tiempo, los grandes traficantes habían establecido muchos de los laboratorios de transformación en estas mismas zonas. Las FARC se benefician así, a la vez, de las tasas impuestas a los narcotraficantes y a sus intermediarios y de las contribuciones voluntarias recibidas de los pequeños cultivadores, generalmente el 10% del monto de sus ventas. Estos ingresos mejoran singularmente los recursos ordinarios asegurados hasta entonces a las FARC por los impuestos a los terratenientes y por los secuestros. Las FARC pudieron, en adelante, contar con combatientes permanentes dotados de armas modernas que reciben un salario y que no conservan gran cosa en común con los grupos de "autodefensa" campesina. Pero la economía de la coca es también un recurso en términos de capacidad de influencia social. Las FARC se transforman en una administración que garantiza el orden social y la protección económica a vastas poblaciones heteróclitas de colonos. Definen los litigios, obligan a los cultivadores a mantener sus cultivos de pancoger y los defienden de los traficantes. Pero no hay ningún motivo para pensar que estos colonos estén fácilmente dispuestos a ligarse a los proyectos revolucionarios. Lo que prevalece de parte y parte es una relación instrumental.

Las guerrillas tienen motivos tanto mayores para dejar desarrollar la economía de la droga cuanto que pueden presentir fácilmente la crisis institucional que tarde o temprano resultará de allí porque muy pronto los "narcotraficantes" son capaces de desafiar el régimen y de corromper sus múltiples engranajes. Inicialmente, los gobernantes están lejos de percibir el riesgo. Hasta 1984, cierran los ojos. Los partidos tradicionales aceptan sin quejarse las generosas subvenciones proporcionadas por los "narcotraficantes" en el momento de las elecciones. Carlos Lehder, uno de los grandes jefes, crea impunemente su propio movimiento político en el Quindío, y Pablo Escobar, el miembro más poderoso del cartel de Medellín,

toma su asiento en el Congreso en las filas del liberalismo. El "proceso de paz" es dirigido por Belisario Betancur como si este nuevo factor no jugara ningún papel en el nuevo ascenso de la lucha armada y en la aparición de un protagonista que dispone de un poder económico y de una capacidad coercitiva ya incontrolable. Será necesario esperar al asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, para que el régimen descubra el desafío al que está confrontado. Ciertamente los "narcotraficantes" no tienen aún, probablemente, un propósito político sino solamente la preocupación de proteger sus intereses. La vulnerabilidad del Estado no es, sin embargo, menos evidente. El aparato de justicia es el primero en descomponerse: el Estado es incapaz de brindarle las garantías que le permitirían perseguir a los traficantes, como lo demuestra el asesinato de los magistrados que no se dan por vencidos. El gobierno no tiene entonces otro recurso sino el de utilizar el tratado de extradición, firmado con los Estados Unidos en 1979. Pero la Corte Suprema de Justicia, renovada después de la matanza del Palacio de Justicia, no se siente muy inclinada a asumir riesgos para ayudar a los dirigentes políticos que, según ella, consintieron en esta masacre. Priva al gobierno del único instrumento, declarándolo inexecutable a comienzos de 1988. La descomposición de la institución judicial no solamente asegura la impunidad de los "narcotraficantes". Hace sentir sus consecuencias en la vida cotidiana puesto que el conjunto de la justicia penal está en realidad paralizado y los litigios ordinarios se resuelven cada día más por las vías de hecho. Ninguna institución está al abrigo de la corrupción: desde luego no lo está la policía pero tampoco el ejército cuyos elementos, subalternos o no, están en contacto con los traficantes. Además, la tradición de precariedad del Estado facilita las cosas, aunque sólo sea impidiendo a la clase política y a la opinión pública tomar conciencia de la degradación institucional o limitando las inquietudes a propósito de sus consecuencias.

La extrema izquierda sólo puede comprobar con placer la expansión de estas plagas. Hacía fácilmente el diagnóstico: descomposición de la pseudo-democracia y de las clases dirigentes; ascenso al poder de los militares en proceso de uruguayización; entre 1984 y 1987, la izquierda

está en la primera fila de combate contra el tratado de extradición, acusado de atentar contra la soberanía nacional. Sin embargo, desde 1983 la izquierda no ignora que grupos financiados por los "narcotraficantes" pueden golpear a la oposición armada o legal en colaboración eventual con la policía y los militares, bien sean de la reserva o estén en servicio activo. En esa fecha, el procurador general de la nación publica un informe sobre una organización, el MAS ("Muerte a los Secuestradores") y establece que en ella se codean sicarios a sueldo de los narcotraficantes y miembros de las fuerzas del orden. Pero la intervención de los "narcotraficantes" contra la subversión no adquiere toda su amplitud sino a partir de 1985. Se intensifica, de hecho, a medida que los intereses de los "narcotraficantes" se diversifican. Sus inversiones se dirigen inicialmente hacia la construcción, se orientan luego hacia la industria y, sobre todo, a la agricultura. Compran, en efecto, de manera masiva, las tierras que los propietarios tradicionales, cansados de pagar impuestos a la guerrilla y más aún vivir bajo la amenaza de secuestro, están dispuestos a ceder. Y ciertamente que a pesar de los deseos expresados en el marco del plan de rehabilitación impulsado por el gobierno de Virgilio Barco de redistribuir las tierras en las zonas de violencia, el Estado no está en capacidad de hacerles competencia a los precios ofrecidos por los traficantes. En poco tiempo, estos se convierten en dueños de inmensas superficies en el Magdalena Medio y en los departamentos de la costa Atlántica: se estima, por ejemplo, que poseen actualmente cerca de la mitad de la superficie del departamento de Córdoba. Su participación en las luchas contra las guerrillas se inspira, pues, en la voluntad de desembarazarse de sus presiones y amenazas. Es muy probable que otras preocupaciones entren también en juego para su colaboración en la "guerra sucia", como la de conservar el monopolio de la fabricación y la comercialización de la cocaína, sin tener que aceptar las condiciones impuestas por la guerrilla. El papel mayor jugado por Gonzalo Rodríguez Gacha (llamado "el Mexicano"), miembro del cartel de Medellín, en la guerra contra las FARC y la UP se explicaría, según se dice, por el hecho de que las FARC no respetaron ciertos acuerdos. Se dice también que recientemente estos habrían querido crear sus propios laboratorios.

Desde todos los puntos de vista, los "narcotraficantes" se convirtieron, de hecho, en un protagonista político de primera magnitud. Aunque estén menos unidos de lo que se piensa (el cartel de Medellín y el cartel de Cali se enfrentan violentamente de vez en cuando), la realidad es que se han convertido en el eje de una extrema derecha ligada al uso del terror. Bajo su sombra se han constituido, un poco por todas partes, centenares de bandas que, en nombre del orden, liquidan militantes de izquierda, vagabundos o marginales. Por su iniciativa o con su apoyo, diversos grupos se esfuerzan por reducir al silencio a los periodistas o a los intelectuales que denuncian su papel en la "guerra sucia" o que invocan el respeto de los derechos humanos: el asesinato del director del periódico "El Espectador", en 1986; el del prestigioso médico Héctor Abad Gómez, en 1987; o la difusión de listas de condenados a muerte y las cartas de amenazas dirigidas a los artistas y a los académicos, dan testimonio del deseo de neutralizar la opinión pública. A partir de las zonas que controlan, ponen en práctica estrategias de tipo militar para reconquistar las regiones dominadas por la guerrilla. Después de las matanzas colectivas perpetradas en Urabá durante el primer semestre de 1988, sus sicarios están en vías de "limpiar" los barrios que rodean a Barrancabermeja, el principal centro de refinamiento del petróleo. Es indudable que estas prácticas encuentran el apoyo de ciertos sectores de la población. A veces, de la población local. En el Magdalena Medio, los excesos cometidos por un frente de las FARC hace algunos años trajeron consigo la adhesión de amplias franjas de la población campesina a los grupos paramilitares. De toda la burguesía media urbana, pronta a imputarle el clima de inseguridad cotidiana a la influencia de la subversión. De ciertos elementos de la gran burguesía económica, cuyos negocios acogen los nuevos capitales y cuyo deseo es el de aprovechar tranquilamente el milagro económico. Finalmente, de ciertos dirigentes militares: la corrupción tiene, sin duda, una parte mucho menor en esta simpatía que la convicción de la imposibilidad de combatir eficazmente la guerrilla, presente en todo el territorio nacional, sin usar los métodos que los "narcotraficantes" pueden manejar impunemente, mientras que los militares siempre pueden ser denunciados ante la opinión pública. La com-

binación de asesinatos muy bien dirigidos contra los cuadros de la Unión Patriótica o contra los militantes campesinos, y de las operaciones "rastrillo" realizadas por los militares, es una táctica que ha permitido la "recuperación" de diferentes zonas del Guaviare, del Meta y del Caquetá: tal combinación no es, probablemente, fruto del azar.

La "guerra sucia" no disminuye necesariamente el potencial militar de las guerrillas. Afecta sus relaciones con sus bases de apoyo. Golpea aún más su capacidad para disponer de una audiencia política. Sin duda, las guerrillas han proporcionado en diversas oportunidades la prueba de que eran capaces de movilizar amplias franjas de la población: en 1986 y 1987, aportaron su apoyo a la manifestación de organizaciones campesinas de gran amplitud; en 1988, en el Magdalena Medio o en Urabá, orquestaron paros sucesivos para protestar contra la militarización. Los asesinatos de Jaime Pardo Leal o de otras figuras de la UP, han suscitado reacciones populares espontáneas. El terror acrecienta, sin embargo, el costo potencial de esta solidaridad. Numerosos líderes de las manifestaciones campesinas han sido asesinados y los antiguos participantes dudan en vincularse nuevamente a estos movimientos. Allí donde las relaciones con las guerrillas son sobre todo instrumentales, como en las zonas de la coca, los colonos pueden aceptar que estos sean reemplazados por el ejército si este no impide sus actividades. En un departamento como el Cauca, los campesinos indígenas expresan abiertamente su aspiración a no verse aprisionados por el fuego cruzado entre unos y otros. De manera general, la coexistencia entre movimientos sociales estables y grupos armados es problemática: lo es todavía más en un contexto de terror. La dificultad se acrecienta para preservar una vasta audiencia política. La extrema izquierda ha suscitado en las ciudades muchas "manifestaciones por la vida", pero estas no han reunido grandes multitudes. En octubre de 1988, lanzó un nuevo paro general, cuidadosamente preparado: pero su balance fue el de un completo fracaso. Los obreros y los estudiantes se mostraron indiferentes a sus consignas. En suma, la estrategia de la lucha armada no suscita ya el entusiasmo. El "proceso de paz" de Betancur tuvo sin duda por efecto alimentar el excep-

ticismo frente a las propuestas de diálogo lanzadas por las guerrillas. Rehusando dar su caución a cualquier nuevo diálogo hasta que las guerrillas no manifestaran su disposición a deponer las armas, el gobierno de Virgilio Barco privó a las organizaciones armadas de toda tribuna pública. El Partido Comunista, en diciembre de 1988, reiteró simultáneamente la doctrina de la "combinación de todas las formas de lucha" y su solicitud de diálogo: esta yuxtaposición dialéctica es denunciada actualmente desde muchos frentes. Los resultados de las elecciones de marzo de 1988 para designar los alcaldes, pusieron en evidencia el contraste de la fuerza electoral de la extrema izquierda, estancada todavía alrededor de un 4%, y la fuerza militar de las guerrillas. No se excluye, sin embargo, que, durante el último año de Barco, las guerrillas y el gobierno inicien diálogos oficiales. El M-19, que no tenía ya peso militar ni político, acaba de firmar un cese al fuego con cláusulas mucho más estrictas que el de 1984. Este podría ser una especie de globo de ensayo. El gobierno no puede ignorar los peligros de dejar progresar una violencia generalizada que parecía escapar a los cálculos de todos los protagonistas.

Dos conclusiones se imponen. La primera es que se está lejos de un conflicto entre dos adversarios bien definidos. Los protagonistas son numerosos. Cada uno de ellos es complejo. Las guerrillas están lejos de estar de acuerdo sobre las tácticas, a pesar de la Coordinadora Simón Bolívar: las FARC-EP condenan la acción del ELN de atacar las instalaciones económicas esenciales para el país y no es seguro que los comandantes superiores lleguen a ejercer una tutela inequívoca sobre los numerosos frentes y columnas o que la acumulación de recursos económicos no deje de ser quizás un medio para transformarse en un fin. No todos los militares hacen probablemente el mismo balance de sus operaciones y de la tolerancia frente a la "guerra sucia"; su credibilidad está en discusión y, más allá de ello, la solidez misma de su institución está puesta a prueba. Los "narcotraficantes" no son sin duda unánimes acerca de la agudización de la "guerra sucia": los miembros del cartel de Cali aspiran a fundirse discretamente en la burguesía y a no aparecer como jefes de bandas. Las organizaciones populares experimentan la gravedad de la di-

solución del tejido social y el debilitamiento de su capacidad de iniciativa. El gobierno civil, por su parte, al menos toma conciencia de la medida de su impotencia. Las interferencias entre las acciones de tantos protagonistas producen resultados que arruinan sus cálculos. Queda por descubrir todo un espacio en el cual se entremezclan arreglos de cuentas, terror político y delincuencia común. La desaparición de las fronteras claras entre lo político y lo no político es el signo de esta mezcla. Es también un peligro para la coherencia de cada protagonista.

La segunda conclusión es que el sistema político revela una sorprendente capacidad para adaptarse a las circunstancias. A lo largo de los tres últimos años, el país ha tenido frecuentemente el sentimiento de no estar gobernado y se ha acostumbrado a vivir sin aparato de justicia. Los partidos tradicionales continúan, sin embargo, comportándose como si no aconteciera nada y, según su estilo habitual, se preparan a las elecciones del año próximo, seguros como están de volver a alcanzar porcentajes próximos a los de las elecciones anteriores y de no tener que temer ninguna irrupción de la extrema izquierda. El mérito, si existe mérito alguno de esta estabilidad, es quizás imputable a la larga historia de la precariedad del Estado. En tiempos normales, esta precariedad tiene la virtud de limitar las expectativas de los ciudadanos. En un contexto de excepción, permite diluir los enfrentamientos que se diseminan y se aíslan en escenarios geográficos y sociales heterogéneos. Ciertamente que de ello no resulta el que la violencia generalizada esté destinada a agotarse por sí misma, pero ciertamente se deriva el que su tono político pueda degradarse. Así, pues, volvemos a encontrar la complementariedad entre el funcionamiento del sistema político y una conflictualidad intensa pero difusa. Una complementariedad que es necesario interpretar, sin duda, como una separación: la política institucional y las luchas sociales se sitúan en dos mundos diferentes. La violencia circula entre los dos.

